

El campo llama a la puerta



Por JAIME LAMO DE ESPINOSA

Querido lector:

De pronto, el campo, que venía estando silencioso y tranquilo, ha levantado su voz en signo de protesta. Sí, “el campo llama a la puerta,” como en la vieja explicación de Beethoven de sus primeras notas en su 5ª sinfonía, cuando decía “es que como si el destino llamara a tu puerta.” Pues bien hoy “el campo llama a la puerta” o quizás grita. Y esa voz, ese aldabonazo, es fruto, creo yo, de una suma de inquietudes que, integradas todas en un mismo cuerpo social y en un concreto momento, produce una alarma que acaba rompiendo el silencio antes comentado.

¿Cuáles son esas inquietudes que le llevan a la alarma? Bien podrían ser los malos resultados económicos del año 2019, la fuerte elevación de Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en este año (5,5%) y el anterior (22,3%) y su coste de seguridad social añadido para el que debe pagarlo, unos precios de productos que no cubren los costes y cuya negativa diferencia se ve agravada por este aumento del SMI, la incertidumbre sobre las ayudas PAC futuras, el desasosiego en las comunidades de regantes sobre el futuro de los riegos en el contexto de la Declaración de Emergencia Climática y sus medidas, los daños producidos en la agricultura mediterránea por la borrasca Gloria, la amenaza no inmediata del Brexit y sus efectos en las exportaciones agroalimentarias, etc., etc. No son pocas ni menores estas alarmas

La cadena alimentaria presiona con fuerza desde los dos lados de la agricultura, pero sobre todo desde la industria agroalimentaria y la distribución, hacia dentro comprimiendo los beneficios y empujando a pérdidas. Es lo que ya denominé hace años como la “doble presión inversa” que los fabricantes de inputs, por un lado, y la cadena agroalimentaria final, por el otro, aprietan y comprimen los beneficios potenciales de la actividad

que, súbitamente, se han conjuntado en este primer mes del año.

Vayamos por partes. La Renta Agraria en 2019 (según la 1ª estimación del Ministerio) se situó en 26.179 millones de euros, inferior en un 8,6% a 2018, pero inferior en -9,9% en términos reales. El dato desalienta y sobre todo sus consecuencias en la vida real, campesina. Pero en cambio esa Renta Agraria es la más elevada de Europa, solo precedida por Francia, que también ha caído un -8,3%, y la Producción de la Rama Agraria es de 50.637 millones, similar a la de 2017, aunque inferior a la del año precedente 2018. Y es que la sequía

afectó fuertemente a los cultivos de secano como aceitunas (-29,5%), cereales (-18,3%), plantas industriales (-16,7%) y uvas (14,4%). Así la Producción Vegetal cayó un -7,1%. Y en otros casos, las diferencias entre oferta y demanda han generado una caída de precios significativa, como en aceite de oliva (-23,2%), frutas (-11,9%) y otras. Lo que se agrava porque los Consumos Intermedios, la compra de inputs, han visto como crecían un 3,6% debido sobre todo a un aumento de sus precios en +2,2%, especialmente en fertilizantes y piensos. Y han disminuido el número de UTAs en -0,4%, debiéndose señalar que la ocupación en el campo está en su nivel más bajo desde 2015. Todo ello conduce a una RA por UTA deflactada de 14.308 euros, cifra inferior a la de los últimos cuatro años precedentes.

En ese contexto de haber sufrido un mal año en muchas producciones, sobre todo vegetales, se eleva el SMI hasta 950 euros (+5,5%), tras la subida del pasado año (+22,3%) con su correspondiente incremento de la carga social que provoca un coste al productor del entorno del 40%. Ambas subidas tienen un fuerte impacto sobre los costes laborales en el campo y se consideran inasumibles por muchos subsectores. Y hacen falta trabajadores. *La Vanguardia* nos advertía hace semanas que “se buscan tractoristas;” no hay relevos cuando alguno se jubila. Y por eso han surgido voces como la de Asaja (Pedro Barato) pidiendo que se controlen los precios

en el campo o no podrán asumir el SMI. Se trata de “regular que los productos que pagan esos jornales tengan un precio digno”. Debe regularse que “los productos del campo no puedan venderse por debajo de sus costes de producción” y ha advertido “que esa subida del SMI provocará una pérdida en los puestos de trabajo del campo”. No olvidemos que el 44% de los agricultores cobra el SMI y que la ocupación agrícola cayó por primera vez desde 2014, pues la agricultura, según la última EPA, destruyó 46.000 empleos en el año 2019 y el número de afiliados a la SS se redujo en 49.796. Y en ese año es cuando se produjo el primer fuerte aumento del SMI.

Pero el sector no puede trasladar ese aumento de casi un tercio del SMI en dos años a los precios a percibir de lo que venden. La relación precios percibidos/precios pagados se deteriora progresivamente. La cadena alimentaria presiona con fuerza desde los dos lados de la agricultura, pero sobre todo desde la industria agroalimentaria y la distribución, hacia dentro comprimiendo los beneficios y empujando a pérdidas. Es lo que ya denominé hace años como la “doble presión inversa” que los fabricantes de inputs, por un lado, y la cadena agroalimentaria final, por el otro, aprietan y comprimen los beneficios potenciales de la actividad. Por eso muchas, muchísimas explotaciones, trabajan ya a pérdidas, no cubren costes. Caen al tiempo sus precios en el campo mientras que suben en los supermercados. El precio del trigo hoy es semejante al de los años 80/90 del siglo pasado. De aquí que hayan surgido protestas en Don Benito, donde Upa-Uce, Asaja y Coag han reclamado precios justos para el campo, con una fuerte y dura manifestación que ha impedido que se pudiera inaugurar la feria Agroexpo. También por los olivereros de Jaén, “aceituneros altivos”, que han cortado carreteras y autovías protestando por sus bajos precios –paradójicamente en año de fuerte reducción de cosechas– y el temor a un

arancel más alto en EE.UU a sus productos. No es de extrañar estas manifestaciones si, como ha declarado el presidente extremeño, Fernández Vara, tras ver la EPA, Extremadura ha perdido en el último trimestre de 2019, 20.000 empleos y se mantiene a la cabeza del paro en España. Y lo mismo ocurre en Murcia y otras comunidades autónomas. Y era de esperar, pues antes de la subida del SMI, ya a mitad de enero, diversas OPAs anunciaron movilizaciones conjuntas en toda España en los meses venideros. Y debemos meditar que para evitar que siga progresando la España vaciada, es necesario que agricultores y ganaderos y sus hijos e hijas puedan vivir en sus pueblos gracias a producciones vendidas a precios que remuneren sus costes de toda índole. Si no, la tentación de la ciudad más grande y más cercana será irresistible y empujada. Y los pueblos seguirán vaciándose y abandonándose las tierras.

En mi carta del 30/9/2018, sobre “prácticas desleales” ya indiqué que para el presidente de la FIAB, Tomás Pascual, el objetivo global era “impulsar una cadena alimentaria que cree valor y lo reparta equitativamente”. Lo reparta equitativamente. Y para Agustín Herrero, director de Cooperativas Agro-alimentarias de España, de vez en cuando se generan guerras de precios en el sector de la distribución que se trasladan hacia atrás a todo el conjunto de la cadena tensionando las relaciones comerciales y presionando a la baja los precios agrarios, al igual que planteó que era el momento de avanzar frente a la venta a pérdidas en la Unión Europea y también en España, dada la creciente destrucción del aparato productivo lo que lleva al éxodo agrario y rural y a la España vacía. Como se ve la vida se repite.

Ante toda esta situación el ministro Planas, con buen criterio, reunió el pasado 3 de febrero a las organizaciones agrarias para tratar de la situación creada. (Me recordó a otras “llamadas del campo” que

viví con Fernando Abril y en años posteriores en el Ministerio y las reuniones subsiguientes). Y el ministro ha presentado una hoja de ruta: luchar contra la venta a pérdidas revisando la Ley de la Cadena Alimentaria, vigilancia sobre las prácticas comerciales prohibidas, pedir una mayor dotación para seguros agrarios y buscar bonificaciones o incentivos que palién en lo posible el duro impacto del SMI. Y además ha convocado a las cadenas de supermercados y a la industria agroalimentaria para que sus políticas de ventas a bajo precio no agraven la espiral a la baja de los precios del campo. Pese a ello los agricultores mantienen su calendario de movilizaciones para todo el mes de febrero y así lo han hecho ante el propio Ministerio el pasado 5 de febrero. Pero la preocupación sobre el campo parece que llega incluso al presidente, que quiere evitar el estallido de la España rural, y a muchos ministros que creen que puede derivar hacia una crisis de “chalecos amarillos” como en Francia. Y esa inquietud ha movilizó a los ministros para generar una “agenda rural” desde diferentes ángulos. Hay inquietud, y es comprensible.

El mundo rural tiene, pues, múltiples problemas acumulados y hay que darles solución. Recomiendo que esa Mesa recién creada pase a llamarse “Mesa de rentas agrarias” y reunirse anualmente para estudiar la situación y proponer soluciones. Algo semejante a lo que se acordó en los Pactos de la Moncloa creando las mesas de precios agrarios que se convirtieron en anuales. Y repensar si hay que volver a una PAC con precios mínimos de garantía, al menos en productos altamente sensibles para cada agricultura o si, al menos, cabría fijar un precio indicativo, orientador para las transacciones. Pienso que cabría instrumentarlo en la nueva PAC que no puede ser continuista. Es ahora el momento de plantearlo. Piénsese.

Un cordial saludo